

"Atendido que la juez que presidió la presente audiencia no se encuentra en funciones", se firma digitalmente por el Ministro de Fe de este Tribunal".

TRANSCRIPCION DE SENTENCIA

En Santiago, a quince de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: De la demanda. Que se ha interpuesto con fecha 4 de septiembre 2024 a folio 2, una acción en procedimiento monitorio por doña MARÍA JOSÉ ANDRADES VIDELA, ingeniera, con domicilio en Santa Herminia 753, comuna de Padre Hurtado, en contra de su ex empleador HIDRONOR CHILE S.A., sociedad del giro de su denominación, RUT N.º 96.607.990-8, representada por Jorge Andrés Stango Willson, RUT N.º 12.721.971-0, cuya profesión u oficio desconoce, ambos domiciliados para estos efectos en Vizcaya N.º 16907, comuna de Pudahuel. Ha solicitado, entonces, que se acceda a su pretensión de declarar el despido injustificado en razón de los argumentos que expuso. Indicó que ingresó a prestar servicios el 15 de abril de 2019, que su función era analista de control de gestión, que prestaba sus funciones en las dependencias de la demandada. Indicó que su remuneración ascendía a la suma de \$2.758.052.- y que su jornada de trabajo era de 45 horas semanal en modalidad mixta, cumplía ciertas horas de manera presencial y el resto en modalidad de teletrabajo. Indicó que el día 1 de julio de 2024, la jefa de Recursos Humanos le entregó la carta de aviso de despido señalando que se iban a prescindir de los servicios de la actora y hace presente, además, que habría estado con una licencia médica en junio de ese año, debido a un trastorno adaptativo por problemas familiares y hace presente esto considerando que es importante indicar que ella no había hecho uso de ningún reposo médico con antelación; sin embargo, en esta oportunidad pretende que se enlace dicha circunstancia con el despido que ha sido víctima. Indica que se invocó en dicha oportunidad en la carta de despido que la empresa la estaba desvinculando por la causal de necesidades de la empresa, el artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo, sin embargo, estimó en su acción que esta no es acorde con la verdad, que no existe tal reestructuración que, de hecho, en su cargo habrían puesto a otra persona con el nombre de ingeniero *trainer* solamente para cambiarle el cargo, pero que cumplía exactamente las mismas funciones. Además, indica que esto no se condice con la realidad de la causal que se está invocando, precisamente por no



guardar relación con la eliminación del cargo, sino simplemente cambiar el nombre de este para que lo pase a ocupar otra persona.

Posteriormente indicó que las partes habrían suscrito un finiquito, que se pagaron los haberes que se indicaron y este habría estampado la reserva de derechos.

Luego funda en las normas de derecho que estima pertinentes y en el petitorio solicitó entonces que se acceda a la declaración de despido injustificado, procediendo entonces con el recargo del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, por la suma que indica y además la devolución del monto descontado por seguro de cesantía, en atención a la misma declaración de despido injustificado, todo ello, con intereses, reajustes y costas.

SEGUNDO: De la resolución y la reclamación. Que por resolución de folio 12, se acogió la acción y en contra de dicha resolución se procedió por una reclamación de la parte demandada y posteriormente citó a las partes la presente audiencia de contestación, conciliación y prueba.

TERCERO: La audiencia. Que la presente audiencia se ha conferido traslado a la parte demandada de manera verbal, quien contestó la demanda solicitando el rechazo en virtud de los argumentos que constan en el audio y, además, reconoció ciertos detalles que permitieron establecer ciertos hechos pacíficos, opuso la excepción de finiquito respecto del monto descontado por AFC. Indicó que las funciones que ejercía la actora fueron absorbidas por otros empleados, que la persona que se habría contratado tenía un perfil distinto y que no es efectivo que fuera para reemplazar a la actora y, por lo tanto, estima que la causal se encuentra bien aplicada. Por lo tanto, procedería el rechazo con costas.

En el mismo acto, el Tribunal ha conferido traslado a la parte demandante para que evacúe lo pertinente respecto de la excepción formulada y, en ese sentido, la apoderada de la parte pidió el rechazo de la misma con costas, en atención a los argumentos que constan en el registro de audio.

Posteriormente, el Tribunal llamó a las partes a conciliación. La parte demandante estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo, la parte demandada solamente ofreció el monto descontado por AFC y, por lo tanto, se dio por frustrado el llamado a conciliación efectuado por el Tribunal.



Posteriormente, como una cuestión previa y fundamental, se fijaron ciertos hechos pacíficos que el Tribunal propuso y las partes estuvieron de acuerdo, quedando del siguiente tenor:

1. La existencia de la relación laboral, la fecha de inicio de esta relación laboral.
2. El cargo de la actora.
3. La fecha del despido.
4. La causal invocada para el despido.
5. Además que las partes suscribieron un finiquito con reserva el día 4 de julio de 2024.

6. La remuneración de la actora;
7. El monto descontado por AFC.

Posteriormente, se fijaron como hechos controvertidos:

1. El contenido de la carta de despido, la efectividad de los hechos y las declaraciones formuladas en ella. Cumplimiento de las formalidades legales.
2. El tenor y el contenido de la reserva. Poder liberatorio del finiquito.

Finalmente, las partes ofrecieron e incorporaron la prueba e hicieron las observaciones que estimaron pertinentes.

CUARTO: La prueba de las partes. La parte demandada acompañó prueba documental consistente en:

1. Contratos de trabajo.
2. Las cartas de despido, que fueron dos, remitidas a la actora, son idénticas, solamente se diferencian en los domicilios; además, los comprobantes de haber efectuado las comunicaciones legales pertinentes mediante Correos de Chile y a través de la Dirección del Trabajo.
3. El finiquito de contrato de trabajo en el que constaba la reserva.
4. Un certificado del monto descontado por aporte al seguro de cesantía.
5. El organigrama de la empresa con anterioridad y posterioridad al despido.
6. El contrato de trabajo suscrito con el Sr. Sánchez.
7. Los descriptores de cargo, del cargo de analista e ingeniero *trainer* y, además,
8. Un set de finiquitos de otros empleados por la causal referida.

Respecto de la prueba testimonial, rindió y compareció legalmente juramentado, doña Nancy Nieto, quien declaró según consta en el registro de audio. En definitiva y lo más importante de su declaración es que ella señaló haber trabajado para la demandada



desde el mes de marzo de 2020 y que es la jefa de Recursos Humanos, que el cargo de la actora era analista de control de gestiones, que sus funciones eran relativas a informes de gestión del área, armar presupuestos anuales. Indicó que la actora no siguió trabajando y que fue desvinculada por la causal de necesidades de la empresa, que hubo un proceso de reestructuración en diversas gerencias, entre ellas, de operaciones, finanzas, medioambiente; que habían dos analistas y que, finalmente, quedó solamente uno, que otros funcionarios absorbieron las distintas tareas que ejercía la actora, entre ellos, el ingeniero *trainer*, que es una política de la empresa Hidronor contratar ingenieros recién egresados que no tengan experiencia y, en ese sentido, se habría contratado y se creó este cargo, que se contrataron tres ingenieros *trainer* y uno de ellos se fue precisamente a la gerencia de operaciones. Las funciones de don Nicolás Sánchez también tenían que ver con informes de control de gestión de contabilidad y, además, que hubo desvinculaciones en otras gerencias. También, señaló en el contrainterrogatorio que esto era para optimizar recursos, que la empresa tiene 200 trabajadores y que las funciones y los cargos se han ido modificando constantemente, en definitiva.

Posteriormente, la parte demandante incorporó la prueba documental, consistente en:

1. La carta de aviso de despido.
2. El finiquito de trabajo.
3. El acta de comparendo.
4. El anexo de contrato de trabajo.
5. Dos licencias médicas de las que habría hecho uso la actora.

QUINTO: De la acción de despido injustificado. Que, por tratarse de una acción de despido injustificado, correspondería a la parte demandada acreditar el cumplimiento de las formalidades legales. En ese sentido, ha acompañado los respectivos comprobantes de envío, además de los certificados de cotizaciones de AFP que dan cuenta de haber cumplido precisamente con las formalidades.

En cuanto a los hechos, también correspondía acreditar aquellos que ha mencionado en la carta y, en ese sentido, la carta de despido de fecha 1 de julio de 2024, indicó lo pertinente:

“De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunicamos a usted que Hidronor Chile S.A., (en adelante la ‘Empresa’ o la ‘Compañía’), ha determinado poner término a su contrato de



trabajo a contar de esta fecha, por la causal establecida en el inciso 1º del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.

La causal antes indicada se fundamenta en el proceso de reorganización y reestructuración interna de la Empresa y, particularmente en este caso, del área de Finanzas, en la cual usted se desempeña en calidad de 'Analista de Control de Gestión'. Esta decisión se enmarca en un contexto de cambios y readecuaciones que se han producido durante este año a nivel organizacional en las distintas áreas y zonas, y que apuntan a lograr una adaptación a una nueva realidad productiva y financiera dentro de un mercado altamente competitivo.

A mayor abundamiento, la realidad actual nos obliga a adoptar medidas para asegurar una mayor estabilidad operativa y una mejor eficiencia en la administración de nuestros recursos, a fin de poder hacer frente responsablemente a los desafíos que nos impone el mercado, debiendo en algunos casos reducir nuestra dotación, revisar los perfiles de las distintas posiciones, reestructurar la distribución del trabajo en algunas áreas, e incluso externalizar determinados servicios.

Pues bien, en esta oportunidad, la Compañía se ve en la necesidad las posiciones de Analista de Control de Gestión actualmente existentes. Hacemos presente que, en atención a lo expuesto, se elimina a contar de esta fecha su puesto de trabajo, siendo sus labores absorbidas por el personal subsistente. A mayor abundamiento, su puesto no será reemplazado”.

La carta nos explica, en definitiva, como se ha incurrido o como esta reestructuración de la que ha hecho alusión se vincularía, en específico, con el cargo de la actora. En ese sentido, expresa que se ha reducido la cantidad de analistas, pero no explica por qué se habría elegido a una de estas personas. Conforme a ello, se acompañó por la empresa un organigrama que da cuenta de la gerencia de administración a la fecha en que la actora prestaba servicios. En ese sentido, se desprende de aquí que existían ciertos jefes de operaciones y supervisores, entre ellos, estaba don Alejandro Kurt Voguel el cual era el jefe de control de gestión y de él dependían dos analistas, doña María José Andrades, la demandante, y don Manuel Alejandro Lillo. Posteriormente, en el organigrama que acompaña la empresa y que se trataría de la situación de la empresa con posterioridad a la desvinculación, se puede percibir que precisamente todos los jefes y supervisores se han mantenido, esto es, doña Shirley Josefina Colmenares, doña Paola Oyarzún, doña Claudia Andrea Pereira, don Alejandro Kurt Voguel. Y del resto de las



jefaturas y del primer organigrama podemos ver que de don Alejandro Kurt, que dependían dos personas, entre ellas, la demandante, solamente depende uno, es decir, la carta para haber cumplido el estándar de prueba que se requiere en este tipo de casos tendría que haber explicado por qué se eligió a don Manuel Alejandro Lillo por sobre doña María José Andrades, lo cual no se ve reflejado en esta. Por lo tanto, la carta no está dotada de la suficiente especificidad. A mayor abundamiento, es posible apreciar precisamente de los mismos organigramas que respecto del resto de las jefaturas se han mantenido todos los personales, es decir, respecto de doña Shirley, se mantuvieron a las cuatro personas que dependían de ella; respecto de doña Claudia Andrea Pereira, la misma situación, también se mantuvo a la misma cantidad de personal. Por lo tanto, resulta, además, contraintuitivo que se proceda a la contratación de una nueva persona, sobre todo en un cargo que la misma testigo ha declarado que está directamente vinculado con absorber parte de las funciones que se han señalado. En ese sentido, la misma parte demandada ha acompañado el contrato de trabajo de don Nicolás, el que consta que fue contratado el día 21 de agosto de 2024, es decir, con posterioridad al despido de la actora. Por lo tanto, no se condice con la causal de necesidades de la empresa que una empresa que precisamente se ve en la necesidad de optimizar sus recursos, unos días después del despido proceda precisamente a contratar a una persona en un cargo que, en definitiva, sin perjuicio de que la parte indica que tiene un nombre distinto, que se trataría de un perfil de cargo distinto, la misma testigo ha señalado que sí se encargó de hacer parte de las mismas funciones que tenía la actora, por lo tanto, no resulta lógico, en esta línea de ideas, que una empresa que se ve en la necesidad de recurrir a la causal de necesidades de la empresa, sólo días después del despido proceda con la contratación de una nueva persona que, según la misma testigo ha declarado, que también ocupa y se encarga de las mismas funciones más allá del nombre que tenga.

Además, es menester también mencionar que existe este antecedente de las licencias médicas que fue debidamente acreditado, que sin perjuicio que se ha indicado en las observaciones a la prueba, que ello correspondería a una tutela, no necesariamente, sino que esto simplemente es un antecedente más para efectos de declarar o estimar que la causal ha sido mal aplicada en este caso, pero la actora no estaría alegando ni cambiando su acción para señalar que había una discriminación, sino simplemente esto contribuye a reforzar la idea que la carta de despido, en definitiva, no se ha hecho cargo de explicar por qué esta trabajadora que cumplía el cargo de analista de



control de gestión fue desvinculada y se mantuvo solo don Manuel Alejandro Lillo; en ese sentido, tendría que haber explicado por qué se prefirió a un trabajador por sobre otro.

De esta forma, no configurándose la causal aplicada, corresponde acoger la acción de despido injustificado en todas sus partes, conforme se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Respecto de la excepción de finiquito que se ha indicado aquí en la audiencia, que corresponde no acceder a la petición de devolución de AFC toda vez que la actora no se habría reservado dicha acción; en ese sentido, corresponde tener presente que al tratarse de una materia de derecho, no procede exigir a la actora que no tiene siquiera el título de abogada, que recurra a la suficiente especificidad de expresar en su reserva que se va a reservar la acción para pedir la devolución del finiquito. En ese sentido, se apreció del finiquito que existe una reserva y que en ella se ha pedido demandar despido injustificado y conforme se dirá expresamente, que una vez que se ha declarado que el despido es injustificado, procederá la devolución del aporte al seguro de cesantía, esto es, una materia de derecho, por lo tanto, no es exigible para los estándares de una reserva que se pida con la suficiente especificidad y tecnicismo jurídico que la actora exponga lo pertinente respecto al finiquito, motivo por el cual se rechazará la excepción opuesta con costas, según se dirá.

SÉPTIMO: Respecto de la devolución del aporte al seguro de cesantía, en atención a que el despido ha sido declarado injustificado, es que no procede que se descuente el monto que conforme se ha hecho en el finiquito. En relación a esta diferencia, corresponde un derecho que tiene el empleador cuando ha procedido por la causal de necesidades de la empresa, conforme al artículo 13 de la Ley 19.728, pero en este caso, se ha demostrado y se ha fallado que esta causal fue invocada de manera errónea, por lo tanto, en mérito de lo anterior, no procede aplicar dicho artículo y, además, esto es consistente con la jurisprudencia unificada de la Excma. Corte Suprema que ha fallado en el mismo sentido en reiteradas ocasiones.

OCTAVO: De la valoración de la prueba, esta ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración la multiplicidad de gravedad, precisión, concordancia y conexión de los medios de prueba rendidos, todo ello conforme al artículo 456 del Código del Trabajo.

NOVENO: Las costas. Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 445, 459 N° 7 del Código del Trabajo, respecto de la acción principal, no se condenará a la demandada en costas por haber tenido motivo plausible para litigar, pero respecto de la



excepción de finiquito, como se ha indicado, si se condenará toda vez que ha sido opuesta de manera temeraria. De esta forma, las costas se regulan en la suma de \$600.000, que corresponden a una cifra menor al 10% lo pedido en la demanda y a la cuantía de este juicio.

Por estas consideraciones revisadas a lo largo de la presente sentencia y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 al 11, 420, 423, 425, 432, 496 al 502 del Código del Trabajo, y las demás normas pertinentes de la Ley 19.728, se declara y se resuelve que:

I.- Se **acoge** la acción interpuesta por doña MARÍA JOSÉ ANDRADES VIDELA, en contra de HIDRONOR CHILE S.A., todos ya individualizados, y se declara que el despido materia de este proceso no ha sido conforme a derecho por la causal invocada, no fue debidamente fundamentada y, por lo tanto, es improcedente y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

a) **\$4.137.078**, por concepto del recargo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

b) **\$2.548.671**, por concepto de devolución del aporte al seguro de cesantía.

II.- Las sumas indicadas precedentemente y a las que fueron condenadas a pagar la demandada, deberán incluir los reajustes e intereses, conforme a lo prescrito en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Se rechaza la excepción de finiquito, con costas, que se regulan en \$600.000, conforme se ha señalado precedentemente.

IV.- En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 13 de la Ley 14.908 y, siempre que exista la obligación legal de retener pensión de alimentos en relación a la trabajadora, el empleador deberá informarlo al Tribunal, descontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las sumas a que se refieren los incisos cuarto y quinto del artículo 13 de la mencionada ley.

V.- Que la parte demandada deberá soportar las costas del proceso, las que se regularon en la suma de \$600.000, conforme se ha indicado.

VI.- Que, ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con ella dentro de quinto día, en caso contrario, dé inicio a su ejecución de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Regístrese.



Se tiene a las partes por notificadas por tratarse una resolución dictada en audiencia. Y archívese en su oportunidad.

Sentencia pronunciada en audiencia por doña **SUSANA DEL PILAR VERDUGO PÉREZ**, Jueza Suplente del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

RIT M-4173-2024

RUC 24- 4-0605026-9

LUIS ALEJANDRO HUERTA AYALA, Ministro de fe subrogante del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

